

Año: 2014

Expediente: 9119/LXXIII

# *H. Congreso del Estado de Nuevo León*



## LXXIII Legislatura

**PROMOVENTE** CC. LIC. RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ, GOBERNADOR  
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

**ASUNTO RELACIONADO:** INICIATIVA DE LEY PARA LA PROTECCION DE PERSONAS  
QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, SE TURNA  
CON CARÁCTER URENTE.

**INICIADO EN SESIÓN:** 19 de Noviembre del 2014

**SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública**

**Lic. Mario Treviño Martínez**

**Oficial Mayor**



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO



**RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ**, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, 69, 81, 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 2, 8, 17, 18 fracciones I, II, III, V, y XIV, 20, 21, 22, 25 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; someto a consideración de esa Soberanía, la presente Iniciativa de **LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN** y de acuerdo a la siguiente:

#### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 18 de junio del año 2008 se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen disposiciones básicas del proceso penal. Esta reforma, la más importante que se ha dado en los últimos tiempos en México, da la pauta para transitar, en materia procesal penal, del sistema inquisitivo mixto donde predomina la escritura, al sistema acusatorio, preponderantemente oral; ello, además de constituir un mandato constitucional para todos los estados de la Federación, del cual honrosamente Nuevo León forma parte, fortalece al país como un Estado Democrático de Derecho, que reconoce y respeta las garantías fundamentales de todos los individuos y la dignidad humana y ha sido precursor de un nuevo modelo de justicia penal.

Este cambio inédito en la República Mexicana, en la que nuestro Estado ha sido promotor e impulsor, parte de una premisa fundamental que es la modificación o renovación integral del marco normativo de la justicia. Lo anterior significa que los ajustes a los ordenamientos jurídicos establecen la pauta y soporte legal para sustentar el cambio y las nuevas instituciones.



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

Ahora bien, considerando que para la debida procuración e impartición de justicia, los ministerios públicos y jueces, requieren de testimonios, eficaces y oportunos, que permitan la identificación del o los probables responsables al establecer un vínculo entre estos y el delito, es necesario que los testigos, puedan rendir su declaración sin ser vulnerables ante la presión de quien está sujeto a un proceso penal, efecto que impacta tanto al testigo como a sus familiares y personas cercanas actos de intimidación, privando a los órganos de procuración e impartición de justicia allegarse de elementos probatorios claves en la decisión final, por lo que atendiendo a los lineamientos apuntados en la presente propuesta de Ley sobre Protección de Testigos; por lo que en los términos del artículo 20 Constitucional apartado C fracción V párrafo segundo, se establece la responsabilidad a cargo del Ministerio Público para que garantice la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas las sujetos que intervengan en el proceso, trasladando a los jueces el deber de vigilar el buen cumplimiento de esta obligación.

Por otra parte suele confundirse la figura del testigo colaborador con el denominado testigo protegido, siendo este último una persona que por su sola calidad de testigo y participar en un procedimiento judicial, se encuentra en una situación de riesgo, el cual requiere de protección por parte de la autoridad a fin de que pueda emitir su testimonio sin coacción o presión alguna.

Ante tal situación resulta necesario contar con un instrumento normativo de índole general que establezca los principios generales que deben de regir para la protección de las personas que se encuentren en una situación de riesgo por su participación dentro de un procedimiento penal, en los términos señalados, buscando el fortalecimiento de esta figura.

Finalmente es importante señalar que esta Iniciativa de Ley aglutina los esfuerzos y participación de connotados representantes de las Instituciones operadoras, partiendo del modelo propuesto por especialistas de la Dirección General de Estudios y Proyectos Normativos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del sistema de Justicia Penal (SETEC) a cargo del Maestro José Castillo Ambriz, de quienes además hemos tenido



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN**

**PODER EJECUTIVO**

especial cuidado en seguir las directrices establecidas con los proyectos normativos.

En ese contexto proponemos a la consideración de ese H. Congreso del Estado la presente Iniciativa de:

**LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL  
PROCEDIMIENTO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 1. Objeto y alcances de la Ley**

La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el Estado. Tiene por objeto establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para proteger los derechos e intereses de los sujetos que intervengan, de manera directa o indirecta en el proceso penal, o bien, de los que tengan algún tipo de relación afectiva o vínculo de parentesco con la persona que interviene en aquél; así como regular las medidas de protección en cuanto a su ámbito de aplicación, modalidades y procedimiento; lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y las demás leyes aplicables.

**Artículo 2. Glosario**

Para los efectos de la presente Ley se entiende por:



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

- I. **Ley:** La Ley para la protección de personas que intervienen en el Procedimiento Penal;
- II. **Programa:** El Programa de Protección a Personas;
- III. **Unidad de Protección de Testigos:** La encargada de la protección de los sujetos en situación de riesgo;
- IV. **Titular:** El Titular de la Unidad de Protección de Testigos, quien será un Ministerio Público;
- V. **Procuraduría:** La Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León;
- VI. **Procurador:** El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León;
- VII. **Medidas de Protección:** Las acciones realizadas por la Unidad de Protección de Testigos tendentes a eliminar o reducir los riesgos que pueda sufrir la persona protegida por esta ley;
- VIII. **Convenio de Entendimiento:** El documento que suscriben el Titular de la Unidad de Protección de Testigos y la persona protegida de manera libre e informada, en el que esta última acepta voluntariamente ingresar al



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

programa; se definen de manera detallada las obligaciones y acciones que realizarán la Unidad, y la persona protegida; así como las sanciones por su incumplimiento;

- IX. **Persona Protegida:** Todo individuo que pueda verse en situación de riesgo por su intervención en un procedimiento penal. Dentro de dicho concepto se considerarán a las personas ligadas por vínculos de parentesco o afectivos con el testigo, la víctima, el ofendido o los servidores públicos en riesgo por sus actividades en el procedimiento;
- X. **Procedimiento Penal:** Las etapas comprendidas desde la investigación inicial hasta la sentencia ejecutoriada, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales;
- XI. **Situación de Riesgo:** La amenaza real e inminente que, de actualizarse, expone la vida o la integridad física o psicológica de la persona protegida, por su intervención en un Procedimiento Penal; y
- XII. **Estudio Técnico:** La opinión técnica con el fin de determinar la situación de riesgo e identificar la medida de protección que pudiera ser aplicable.



GOBIERNO DEL ESTADO

DE NUEVO LEÓN

PODER EJECUTIVO

### Artículo 3. Principios básicos

Para la aplicación de la presente Ley se tendrán en cuenta los siguientes principios:

- I. **Proporcionalidad y necesidad:** las medidas de protección deberán ser proporcionales al riesgo y sólo podrán ser aplicadas en cuanto fueren necesarias para garantizar la seguridad de la persona protegida;
- II. **Confidencialidad:** toda la información relacionada con el ámbito de protección del sujeto en situación de riesgo se empleará sólo para los fines del procedimiento;
- III. **Reserva:** toda la información relacionada con el ámbito de protección de la persona en situación de riesgo será reservada;
- IV. **Temporalidad:** las medidas de protección subsistirán mientras exista la situación de riesgo; y
- V. **Gratuidad:** el acceso a las Medidas de Protección otorgadas por el Programa no generará costo alguno para la persona protegida.



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

**Artículo 4. Personas protegidas**

Podrán ser personas protegidas: las víctimas, los ofendidos, los testigos y en general quienes intervengan en el procedimiento; así como otros sujetos que, con motivo del mismo, se encuentren en situación de riesgo, en los términos de la presente ley.

**Artículo 5. Competencia**

La Unidad de Protección de Testigos, dependiente de la institución del Ministerio Público del Estado, es el órgano encargado de garantizar la protección de los sujetos en situación de riesgo y otorgar, a quienes considere pertinente las medidas de protección necesarias con base en los criterios orientadores; sin perjuicio de las facultades que corresponden a la autoridad judicial, de conformidad con lo establecido en este ordenamiento, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las demás leyes aplicables.

**Artículo 6. Deber de informar**

El Ministerio Público en la primera entrevista a los intervenientes en el proceso penal, deberá informarles sobre la posibilidad de aplicar medidas para protegerlos,



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

y la importancia de dar aviso sobre cualquier evento que pueda constituir una amenaza o presión por el hecho de su participación en el procedimiento penal.

**Artículo 7. Obligación de colaboración**

Las entidades, los organismos y las dependencias estatales o municipales, así como las instituciones privadas, con los que se haya celebrado convenio, quedan obligados a prestar la colaboración que se requiera para la aplicación de las medidas de protección y asistencia previstas en esta Ley.

Las instancias mencionadas también estarán obligadas a mantener en reserva y estricta confidencialidad toda la información que adquieran en virtud de su participación en las actividades de colaboración que ordena esta Ley.

**Artículo 8. Canalización a servicios sociales**

El Ministerio Público canalizará a los intervenientes del procedimiento penal que se encuentren en riesgo, a los servicios sociales apropiados, para el resguardo y la protección de su integridad física y psicológica.

**Artículo 9. Facultades y obligaciones de las autoridades competentes**

Para el cumplimiento de los objetivos de esta ley, la Unidad de Protección de Testigos tiene, sin perjuicio de las que confieren otros ordenamientos, las siguientes facultades y obligaciones:

- I. Otorgar las medidas de protección, en coordinación con el Agente del Ministerio Público respectivo; y escuchando al interesado;



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

- II. Informar al Agente del Ministerio Público sobre la necesidad de solicitar a la autoridad judicial la aplicación o modificación de alguna medida de protección;
- III. Realizar los estudios técnicos;
- IV. Mantener un mecanismo de comunicación eficaz que opere las veinticuatro horas del día, con personal especialmente capacitado, para atender a las personas en situación de riesgo;
- V. Vigilar que el personal encargado de la protección trate con apego a los derechos humanos a las personas en situación de riesgo;
- VI. Dar seguimiento a las medidas de protección que se impongan;
- VII. Llevar una estadística de los servicios proporcionados, para el análisis y el mejoramiento del servicio;
- VIII. Elaborar los protocolos para atender las solicitudes de protección;
- IX. Requerir a las instancias públicas y privadas la colaboración que sea necesaria para el mejor desarrollo de sus atribuciones;

A<sup>9</sup>



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

- X. Asesorar, en materia de protección, a las instancias que participen en la ejecución de las medidas;
  
- XI. Proponer los convenios de colaboración o coordinación con las entidades, organismos, dependencias o instituciones que resulten pertinentes para facilitar la protección de las personas en situación de riesgo, así como la normatividad necesaria para el cumplimiento de sus funciones;
  
- XII. Generar proyectos de difusión a la sociedad de las actividades que realiza;
  
- XIII. Elaborar anualmente los programas de protección a los sujetos en situación de riesgo, así como el presupuesto estimado necesario para su ejecución; y
  
- XIV. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales aplicables.

**Artículo 10. Poder Judicial del Estado**

Para los efectos de esta ley, el Poder Judicial del Estado deberá:

- I. Verificar que el interesado en la protección, conozca sus derechos;
  
- II. Dictar las medidas pertinentes para el resguardo de la identidad y otros datos personales de las personas protegidas;



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

- III. Canalizar a la Unidad de Protección de Testigos a los sujetos que requieran medias para proteger su integridad física y psicológica, que en los términos de esta ley se encuentren en riesgo; y
  
- IV. Vigilar que no se violenta el ejercicio del derecho de defensa u otros derechos fundamentales, con motivo del cumplimiento de las medidas de protección.

**Artículo 11. Criterios orientadores para el otorgamiento de las medidas de protección**

Las medidas a que se refiere la presente ley, serán aplicadas por el Titular de la Unidad de Protección de Testigos atendiendo a los siguientes criterios orientadores y al resultado del estudio técnico:

- I. La presunción de un riesgo para la integridad de las personas protegidas, a consecuencia de su participación y/o conocimiento del procedimiento;
  
- II. La viabilidad de la aplicación de las medidas de protección;
  
- III. La urgencia del caso;
  
- IV. La trascendencia de la intervención de la persona a proteger, en el procedimiento penal;



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

V. La vulnerabilidad de la persona a proteger; y

VI. Otros que justifiquen las medidas.

**Artículo 12. Catálogo de medidas de protección**

Las medidas de protección de carácter provisional o permanente podrán ser, entre otras, las siguientes:

- I. La custodia personal o del domicilio, mediante la vigilancia directa o a través de otros medios;
- II. El desalojo del imputado o sentenciado del domicilio de la persona protegida, cuando se trate de delitos sexuales o de violencia intrafamiliar;
- III. El alojamiento temporal en lugares reservados o en centros de protección;
- IV. La prevención a las personas que generen un riesgo para que se abstengan de acercarse a cualquier lugar donde se encuentre la persona protegida;
- V. El traslado con custodia a las dependencias donde se deba practicar alguna diligencia o a su domicilio;
- VI. Las consultas telefónicas periódicas de la policía a la persona protegida;
- VII. Los botones de emergencia o seguridad, en el domicilio de la persona protegida o alarmas de ruido;
- VIII. El aseguramiento del domicilio de la persona protegida;
- IX. El suministro de los recursos económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, servicios de educación, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del Estado o del



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

- país, mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios;
- X. El cambio de domicilio, dentro o fuera del territorio estatal o nacional;
  - XI. El traslado con custodia de los sujetos protegidos;
  - XII. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad que tuviera en su posesión el imputado;
  - XIII. Proveer los servicios necesarios para asistir a la persona protegida; y
  - XIV. El uso de métodos que imposibiliten la identificación visual o auditiva de la persona protegida, en las diligencias en que intervenga. La aplicación de esta medida no deberá coartar la defensa adecuada del imputado.

Lo anterior, sin perjuicio de las medidas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 13. Resguardo de la identidad y otros datos personales**

El resguardo de la identidad y de otros datos personales es una medida de protección a cargo de todas las autoridades involucradas en el procedimiento penal, especialmente del Ministerio Público y del Poder Judicial, y se impondrá invariablemente desde la primera actuación hasta el final del procedimiento, o hasta que se considere conveniente, para los intervenientes, testigos y sus allegados, en los casos de:

- a) Víctimas u ofendidos menores de edad;
- b) Violación;



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**  
c) Secuestro; y

- d) Cuando el juzgador lo estime necesario para la protección de la víctima o el ofendido.

**Artículo 14. Protección en los centros o establecimientos penitenciarios**

Tratándose de personas protegidas que se encuentren recluidas en prisión preventiva o en ejecución de sentencia, se tomarán las siguientes medidas:

- I. Su separación de la población general de la prisión, asignándolas a áreas especiales dentro del centro o establecimiento penitenciario; o trasladándolas a otro con las mismas o superiores medidas de seguridad;
- II. Otras que se consideren necesarias para garantizar la protección de dichas personas; y
- III. Las que específicamente refiere la Ley de Ejecución de Sanciones Penales.

**Artículo 15. Derechos de la persona protegida**

Además de los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la demás legislación aplicable, toda persona protegida tendrá los siguientes derechos:



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

- I. A que en todo momento se respeten sus derechos humanos;
- II. A recibir, en forma gratuita, asistencia psicológica, psiquiátrica, jurídica, social o médica, cuando sea necesario;
- III. A que se le gestione una ocupación laboral estable o una contraprestación económica razonable, cuando la medida de protección otorgada implique la separación de su actividad laboral;
- IV. A que no se capten ni transmitan imágenes de su persona ni de los sujetos con los que tenga vínculo de parentesco o algún tipo de relación afectiva, que permitan su identificación como persona protegida. La autoridad judicial competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del interesado, ordenará la retención y el retiro del material fotográfico, cinematográfico, videográfico, o cualquier tipo que contenga imágenes de alguno de aquéllos; y
- V. A ser escuchada antes de que se le apliquen, modifiquen o revoquen medidas de protección.

**Artículo 16. Obligaciones de la persona protegida**

La persona protegida tendrá las obligaciones siguientes:



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

- I. Colaborar con la procuración y la administración de justicia, siempre que legalmente esté obligada a hacerlo;
- II. Cumplir con las instrucciones y órdenes que se le hayan dado para proteger sus derechos;
- III. Mantener absoluta y estricta confidencialidad respecto de su situación de protección y de las medidas de protección que se le apliquen;
- IV. No divulgar información sobre los lugares de atención o protección de su persona o de otras personas protegidas;
- V. No revelar ni utilizar la información relativa a los programas de protección para obtener ventajas en provecho propio o de terceros;
- VI. Someterse al estudio técnico a que se refiere esta Ley;
- VII. Atender las recomendaciones que le formulen en materia de seguridad;
- VIII. Abstenerse de concurrir a lugares que impliquen algún riesgo para su persona;
- IX. Abstenerse de frecuentar personas que puedan poner en riesgo su seguridad o la de las personas con las que tiene vínculos de parentesco o algún tipo de relación afectiva;



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

- X. Respetar a las autoridades y a todo el personal encargado de su protección;
- XI. Informar a la autoridad de la medida impuesta, con el fin de que se valore su continuación o suspensión; y
- XII. Las demás que les sean impuestas.

La Persona Protegida, será responsable de las consecuencias que se deriven, cuando por sus actos infrinja las normas que el programa le impone. En consecuencia, debe respetar las obligaciones a que se compromete al suscribir el convenio.

**Artículo 17. Condiciones y suspensión de las medidas de protección**

La aplicación de las medidas de esta Ley estará condicionada, en todo caso, a la aceptación por parte de la persona protegida, tanto de las medidas de protección como de las condiciones a que se refiere el artículo anterior y las que en cada caso concreto se determinen.

Las medidas de protección se suspenderán o revocarán cuando la persona protegida incumpla con cualquiera de las condiciones aceptadas, se haya conducido con falsedad, haya ejecutado un delito doloso durante la permanencia en el Programa o se niegue a declarar en el procedimiento por el que se les brindó la protección.



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

**TÍTULO SEGUNDO**  
**PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN**  
**DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN**

**Artículo 18. Incorporación al programa**

Las medidas de protección podrán iniciarse de oficio o a petición de parte.

En el supuesto de que el Agente del Ministerio Público o el Órgano Jurisdiccional adviertan que una persona se encuentra en situación de riesgo inminente, podrán dictar las medidas de protección provisionales que sean necesarias.

Establecidas las medidas, el Ministerio Público o en su caso en Juez solicitará al titular de la Unidad de Protección de Testigos se realice el estudio técnico correspondiente, con la finalidad de valorar la imposición de medidas de protección permanentes.

**Artículo 19. Solicitud de la medida de protección a petición de parte**

Cuando una persona requiera protección para sí o para otra u otras, el Ministerio Público le informará las medidas de protección que pudieren resultar idóneas para el caso y solicitará a la Unidad de Protección de Testigos que realice el estudio técnico.



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

**Artículo 20. Estudio Técnico**

El personal de la Unidad de Protección de Testigos deberá realizar el estudio técnico a la persona a quien provisionalmente se le ha otorgado una medida de protección, para que junto con los criterios orientadores, permitan al Ministerio Público, o en su caso al Órgano Jurisdiccional decidir sobre la procedencia de la incorporación o no de una persona al programa y por ende las medidas de protección permanente que se otorgarán.

El estudio técnico se remitirá al Ministerio Público o en su caso al Órgano Jurisdiccional en un máximo de veinticuatro horas, contadas a partir del momento en que se reciba la solicitud

Hasta en tanto se determine la incorporación al programa, seguirán aplicándose las medidas de protección provisionales.

**Artículo 21. Contenido del Estudio Técnico**

El estudio técnico, deberá de contener por lo menos:

- I. Los datos que de modo razonable revelen la existencia o no de un nexo entre la intervención de la persona a proteger en el procedimiento penal y los factores de riesgo en que se encuentre la misma;



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

- II. En los casos en que se haya concluido la participación de la persona protegida en el procedimiento penal, se realizará un estudio a fin de determinar si subsisten las condiciones de riesgo para determinar la continuidad o terminación de las medidas de protección;
- III. El consentimiento expreso e informado de la persona a proteger;
- IV. La información que haya proporcionado la persona a proteger, para realizar el estudio técnico. Al efecto, deberá haberse apercibido a aquélla de que, si hubiera faltado a la verdad, dicha circunstancia bastará para que no sea incorporada al programa;
- V. La propuesta de medidas de protección específicas que se consideren idóneas para garantizar la seguridad de la persona a proteger;
- VI. Las obligaciones legales que la persona a proteger tenga con terceros;
- VII. Los antecedentes penales que, en su caso, tuviere la persona a proteger; y
- VIII. Cualquier otro elemento necesario que justifique las medidas.



## GOBIERNO DEL ESTADO

DE NUEVO LEÓN

PODER EJECUTIVO

### Artículo 22. Convenio

Una vez que el Titular de la Unidad de Protección de Testigos otorgue las medidas de protección permanentes, la persona protegida deberá suscribir un convenio de manera conjunta con el mismo, que contendrá como mínimo:

- I. La manifestación de voluntad de la persona sobre su admisión al programa de manera voluntaria, con pleno conocimiento, sin coacción y que las medidas de protección a otorgar no serán entendidas como pago, compensación o recompensa por su intervención en el procedimiento penal;
- II. La manifestación de la persona de estar enterada sobre la temporalidad de las medidas de protección, las cuales se mantendrán mientras subsistan las circunstancias que les dieron origen;
- III. Los alcances y el carácter de las medidas de protección que se van a otorgar;
- IV. La facultad del Titular de la Unidad de Protección de Testigos de mantener, modificar o suprimir todas o algunas de las medidas de protección, cuando exista la solicitud de la persona o cuando la persona protegida incumpla con cualquiera de las condiciones aceptadas o se haya conducido con falsedad;



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

**V. Las obligaciones de la persona de:**

- a. Proporcionar información veraz y oportuna para el procedimiento;
- b. Comprometerse a participar en los actos procesales que se le requieran;
- c. Comprometerse a realizar las acciones solicitadas por la Unidad de Protección de Testigos para garantizar su integridad y seguridad;
- d. El deber de confidencialidad de las condiciones y formas de operación del programa, incluso cuando salga del mismo; y
- e. Cualquier otra que la Unidad de Protección de Testigos considere oportuna.

**VI. Las sanciones por infracciones cometidas por la persona a proteger, incluida la separación del Programa; y**

**VII. Las condiciones que regulan la terminación de su incorporación al Programa.**

En caso de que la Persona Protegida sea un menor o sujeto de tutela, el convenio deberá también ser suscrito por el padre o tutor o quien ejerza la patria potestad o representación.

En caso de que sean incorporados de manera simultánea por un mismo hecho o circunstancia varias personas para la protección, el hecho de que alguna de ellas incumpla con las obligaciones impuestas, no afectará a las demás personas que se encuentren relacionadas con esta.



## **GOBIERNO DEL ESTADO**

**DE NUEVO LEÓN**

**PODER EJECUTIVO**

### **Artículo 23. Duración de las medidas de protección**

Las medidas de protección podrán aplicarse desde la investigación inicial, hasta después de ejecutoriada la sentencia, siempre y cuando la situación de riesgo inminente subsista.

### **Artículo 24. Medio de Impugnación.**

Las decisiones del Titular de la Unidad de Protección de Testigos que decreten, nieguen, modifiquen o revoquen las medidas de protección permanentes, deberán ser notificadas a la persona protegida quien las podrá impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia, dentro del término de tres días, para decidir en definitiva, citando a las partes interesadas, que en caso de no comparecer a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación.

La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.

Cuando el imputado, acusado o su defensor, estimen que la medida impuesta vulnera sustancialmente su derecho a la defensa, podrá impugnarla ante la autoridad jurisdiccional.



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

**Artículo 25. Legitimación para promover el medio de impugnación.**

La impugnación podrá ser promovida por cualquier persona a quien cause perjuicio la medida de protección impuesta; sin que ello suspenda los efectos de la medida impugnada.

**Artículo 26. Terminación de las medidas de protección y desincorporación del programa.**

El otorgamiento y mantenimiento de las medidas de protección está condicionado al cumplimiento de las obligaciones descritas en el artículo 16 de la presente ley y de las obligaciones establecidas en el convenio; su incumplimiento podrá dar lugar a la revocación de su incorporación al programa.

La persona podrá renunciar de manera voluntaria a las Medidas de Protección o al Programa, para lo cual la Unidad de Protección de Testigos deberá realizar las gestiones necesarias para dejar constancia de esa circunstancia.

El titular de la Unidad de Protección de Testigos también podrá dar por concluida la permanencia de la persona protegida en el programa, cuando dejen de actualizarse las circunstancias de riesgo que originaron su incorporación.

La anterior resolución en todo caso será notificada por escrito a la persona protegida.



**GOBIERNO DEL ESTADO**

**DE NUEVO LEÓN**

**PODER EJECUTIVO**

**Artículo 27. Terminación de la medida de protección.**

La terminación del otorgamiento de las medidas de protección o la desincorporación de la persona al programa, será decidida por el titular de la Unidad de Protección de Testigos, de oficio, a petición del Agente del Ministerio Público que solicitó el ingreso de la persona protegida, o cuando se entiendan superadas las circunstancias que motivaron la protección, o por incumplir con las obligaciones asumidas por la persona protegida.

**TÍTULO TERCERO**

**SANCIONES**

**Artículo 28. Violación de la reserva.**

Quien con la intención de poner en riesgo la seguridad de una persona protegida de conformidad con esta ley, divulgue o revele información sobre las medidas de protección otorgadas, será sancionada con prisión de dos a cuatro años y de quinientos a mil días multa.

Cuando el sujeto activo sea servidor público, la pena se incrementara hasta en una tercera parte.



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

**Artículo 29. Desacato de la medida de protección ordenada.**

A quien estando obligado a ejecutar una medida de protección conforme a esta ley y no le diere cabal cumplimiento en los términos y condiciones establecidos; será sancionada con prisión de dos a cuatro años y de quinientos a mil días multa.

Si derivado de la conducta descrita en el párrafo anterior la persona protegida sufriera un daño o lesión en su integridad, libertad o bienes materiales, la pena será de cuatro a ocho años de prisión y se incrementará en una mitad si se produjere la muerte.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO:** El presente Decreto entrará en vigor, en la misma fecha en que inicie su vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Estado de Nuevo León.

**SEGUNDO:** Se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado para que disponga las medidas financieras para la debida implementación de la Unidad de Protección de Testigos prevista en la presente Ley.



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO

Monterrey, Nuevo León, a 14 de noviembre de 2014

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ

EL C. SECRETARIO GENERAL DE  
GOBIERNO

EL C. PROCURADOR GENERAL DE  
JUSTICIA DEL ESTADO

ÁLVARO BARRA HINOJOSA

ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS

EL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y  
TESORERO GENERAL DEL ESTADO

EL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD  
PÚBLICA DEL ESTADO

RODOLFO GÓMEZ ACOSTA

GRAL. DIV. D.E.M. RET.  
ALFREDO FLORES GÓMEZ



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO**

**EL C. DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISION EJECUTIVA PARA LA  
REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA  
PENAL EN EL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN**

  
**CATARINO GARCÍA HERRERA**



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.